

Los cien días y las cien noches del gobierno Aznar

TRANSCURRIDO ese plazo arbitrario de cien días de gracia, que la clase política y los periodistas conceden a cada nuevo gobierno, ya han empezado a menudear los juicios sobre la gestión de los populares al frente del Ejecutivo... Han aparecido turiferarios y maldecidores, los que no ven indicios de nada bueno y los que no lo ven de nada malo. Las cosas, como casi siempre, no son ni del todo luminosas ni del todo tenebrosas. Es preciso reconocer algunos aciertos, pero es también justo denunciar algunos graves errores. Es lo que pretendemos hacer con la mayor independencia de juicio posible en este comentario editorial, por eso lo titulamos «Los cien días y las cien noches del gobierno Aznar». La propia naturaleza del género editorial nos exige brevedad y, por tanto, fundamentar nuestras conclusiones en el análisis global de las grandes cuestiones, no en el minucioso recuento de los hechos.

Los días

ES indudable que el nuevo gobierno puede apuntarse en su haber algunos logros importantes que merecen el reconocimiento ciudadano:

1. Ha apaciguado la crispación nacional. No todo es mérito suyo, pero la llegada del PP al poder supuso una casi automática evaporación de la crispación nacional creada por la corrupción y sospecha criminal que pesaba sobre el gobierno precedente. Tal vez cualquier relevo nos hubiera librado del gesto torvo y la discusión irritada que fueron comunes en los últimos tiempos del felipismo. Pero Aznar, además de beneficiarse por azar de ser el catalizador circunstancial de la distensión, ha sabido conservar el nuevo tono del país, sin que se agríe nuestro queso de cada día. Seguramente la necesidad de apoyos externos le obliga a no molestar demasiado a nadie, pero no por ello es menos meritorio el nuevo talante favorecedor de la paz social.

Este nuevo clima se cimenta básicamente en dos frentes: los sindicatos y la prensa. Con los sindicatos se negocia todo, hasta tal punto que sus dirigentes han llegado a afirmar que «para el nuevo gobierno es más importante mantener la paz social que ahorrar unas decenas de miles de millones». El talante pactista del nuevo gobierno, especialmente de su ministro de Trabajo, parece alejar del horizonte ese otoño caliente que muchas veces se ha anunciado. Con la prensa sucede algo similar: ante las fuertes críticas al ministro Serra, Aznar ha reaccionado al mismo tiempo que proclamaba nítidamente la libertad de expresión. Este talante hace imposible la escalada de tensión y la subida de tono de los periódicos del día siguiente. Estamos, afortunadamente y ojalá sea por mucho tiempo, a años luz del felipismo de los últimos años en el que los periodistas que denunciaban la corrupción o las tropelías de los GAL eran tildados de conspiradores contra el orden constitucional y se los funigaba con exclusiones y amenazas de querellas que casi nunca eran jurídicamente posibles.

2. Ha evitado la crispación nacionalista. Antes de Aznar no era viable una alianza entre los partidos nacionalistas y

el PP. La distancia de ideas, lenguaje y talante era tal que PNV y CiU preferían aliarse con el PSOE antes que hacerlo con el PP, a pesar de que su ideario es coincidente hasta tal punto que el PNV y UDC —uno de los dos partidos que integran CiU— pertenecen a la misma Internacional Democristiana. Después de Aznar esa alianza de afines es posible y actuante. Le resultó muy trabajoso al dirigente popular encadenar a sus demonios familiares, condición necesaria para poder compartir con el nacionalismo moderado una «cierta idea de España» y conseguir así los apoyos necesarios para gobernar con cierta estabilidad. Se despojó o se vio obligado a despojarse de muchas de sus tesis o, al menos, a ponerles tal sordina que las hizo irreconocibles. Incluso ha llegado al sacrificio anunciado de Vidal Quadras, presidente del partido en Cataluña.

PARA muchos esta rebaja de programa constituye una decepción. Probablemente es una deslealtad del PP para con su electorado. Alguien la interpretará incluso como mercadéu en el que no se duda en cambiar principios por poltronas. Pero puede ser interpretada también como un esfuerzo por construir la España posible, por vertebrarla en un pacto de mayorías en todos los territorios.

3. Ha abordado sin miedo a perder popularidad los graves problemas del ajuste económico y de la financiación del Estado de Bienestar. Al recién llegado Aznar no le ha temblado el pulso. Desde el primer día ha impuesto, sin concesiones a la demagogia, los ajustes económicos imprescindibles para la convergencia con Europa: la inflación, el déficit, la deuda y los tipos de interés. En todos estos frentes parece que se está combinando el éxito y la prudencia: los precios están controlados ya que en junio descendieron una décima y sólo subieron una décima en julio y dos en agosto. Los tipos de interés han bajado en más de un punto, el déficit tiende a reducirse por la moderación del gasto; la deuda no ha crecido y, gracias a la bajada de tipos, está disminuyendo. Todo ello ha venido acompañado de una pequeña pero constante caída del desempleo. Puede que todas estas cifras, en principio positivas, no lo sean tanto si tenemos

en cuenta que, durante el último trimestre, la producción industrial ha descendido en más del 5 por 100, lo que significa que todos estos meritorios controles pueden tener en el fondo más apariencia que realidad. Pero, así y todo, no deja de ser admirable el giro que en los últimos meses han tomado los asuntos de la economía.

En cuanto a la financiación del Estado del Bienestar, el nuevo gobierno ha planteado con crudeza la necesidad de reformar el reglamento del sistema de pensiones y ya ha preparado medidas que modificarán los períodos de cotización y de cálculo de las pensiones, harán recaer sobre el usuario una parte del precio de los medicamentos, etc. Medidas dolorosas pero que ningún gobierno responsable puede diferir, como diferió el gobierno anterior para preservar su buena imagen y dejando la patata caliente en las manos del sucesor.

Las noches

LOS elementos negativos de estos casi cuatro meses de gobierno son graves y preocupantes:

- 1. En primer lugar, es un gobierno de intenciones más que de hechos. En decenas de ocasiones ha anunciado que iba a hacer y en otras tantas no lo ha hecho. Ha anunciado tantas cosas sin cumplirlas que los socios de CiU se han cansado y le han exigido que **haga más y no anuncie tanto lo que va a hacer**. Desde la oposición dicen que Aznar ocupa pero no desempeña el oficio de gobernar. Desde la simple ciudadanía le decimos que gobernar por globos sonda es indigno y que una de dos: si el gobierno está convencido de que debe hacer lo que anuncia, que lo haga; y, si no lo está, que no lo anuncie. De muchas de las cosas anunciadas ya se ha desdicho o se desdirá. Es lamentable que el gobierno dilapide así su credibilidad.*
- 2. En segundo lugar, se muestra aún más débil de lo que es. Ante el revuelo que ha creado el simple anuncio de medidas como la revisión del reglamento del sistema de pensiones o el cobro de cien pesetas por receta a los jubilados, el gobierno ha dado marcha atrás y ha retirado ambas*

medidas o, mejor dicho, las remitirá al Congreso de los Diputados, lo que a efectos prácticos tal vez resulte equivalente. En otras ocasiones, como en el asunto del nuevo mapa escolar, ha seguido una política errática, concediendo centros allí donde más recia era la protesta, aunque no siempre reuniera la comarca los requisitos mínimos de población escolar. Gobernar tratando de contentar a todos es el mejor camino para terminar no contentando a nadie. No podemos creer que esta debilidad se deba únicamente a la bisonñez del nuevo equipo. Más bien creemos que se debe a falta de claridad en las ideas y a falta de coraje para la acción. Esta falta de musculatura para elaborar convicciones prácticas desde la incertidumbre o para llevarlas a la práctica cuando ya se tienen constituye la antítesis del gobernante o timonel de la nave.

3. *Su actuación en el asunto del CESID es, cuando menos, sospechosa.* Tras prometer que contribuiría a aclarar los hechos, ofrecer colaboración con el poder judicial y asegurar transparencia informativa, el gobierno nos sorprendió a todos a principio de agosto, cuando menos eco podía tener, con una medida inesperada y, desde nuestro punto de vista, difícil de argumentar: la negativa a desclasificar los papeles del CESID. Tal medida vino cuidadosamente preparada por una sucesión de declaraciones: a) primero Aznar cerró de un portazo la vía a las investigaciones parlamentarias, con el peregrino argumento de que **las responsabilidades políticas ya quedaron sustanciadas en las elecciones** y con otro no menos curioso e increíble: **no corresponde al gobierno investigar a la oposición**; b) después, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, aseguró que los papeles del CESID o no existían o carecían de importancia, es decir que, de cara a un posible proceso penal, no habría pruebas; c) finalmente, se decide mantener como secreto oficial, por afectar a la seguridad del Estado, esos mismos papeles que pocos días antes se nos aseguraba no existían. A su vez, tal medida vino seguida del anuncio de un anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que abría las carnes y que nos retrotraía legislativamente a períodos felizmente superados. Afortunadamente, la oposición frontal a ese intento legislativo

fue tan extensa e intensa que el gobierno lo retiró. Pero ya había dejado claras sus intenciones.

UN elemental sentido de situación hace que no podamos creer al gobierno. Como dijo Calvo Sotelo: «En España tenemos muy pocos secretos que afecten a la seguridad del Estado y, desde luego, ninguno que merezca ser guardado durante cincuenta años». Tampoco creemos en los razonamientos del gobierno para justificar la denegación a los jueces de los papeles del GAL. Los ciudadanos tampoco los creen, aunque muchos de ellos callen y se alegren de que los procesos —legales y de opinión pública— no puedan alcanzar a las ilustres personas y altas instituciones adonde llegaron las responsabilidades. Otros, en cambio, no se muerden la lengua y dicen, cada vez con más contundencia, que, al actuar de este modo, el gobierno se ha hecho cómplice de la corrupción y de los crímenes cuya investigación dificulta. No pedimos justicia al precio de que perezca el mundo. La justicia sin piedad suele no ser otra cosa que crueldad. Pero cerrar en falso los crímenes de Estado es mucho peor que una ley de punto final y por supuesto mucho peor que un indulto tras una condena justa. Todos los interrogantes sobre la actuación del gobierno están permitidos, cualesquiera que sean las instituciones, además del gobierno, a quienes esos interrogantes puedan referirse. El gobierno ha perdido la ocasión de promover la justicia, pues tenía también los medios para promover la piedad.

En resumen, el balance de los cien días es claroscuro, pero la gravedad de lo ocurrido en las noches hace que el sextante de nuestro juicio se incline más a la crítica que al aplauso.